

Endeudamiento de la estatal es más alto que el de mineras privadas:

Los tres desafíos que deberá enfrentar la nueva administración de Enami

El nuevo vicepresidente ejecutivo tendrá que consolidar una recuperación financiera, además de materializar dos megaproyectos.

CATALINA MUÑOZ-KAPPES

Consolidar la recuperación financiera y materializar dos megaproyectos son las principales tareas de Juan Carlos Sáez, el recién nombrado vicepresidente ejecutivo de la Empresa Nacional de Minería (Enami). En los últimos dos años, Enami registró resultados positivos luego de un complicado período financiero. Las utilidades en 2025 alcanzaron los US\$ 38,9 millones. “Es un desafío bastante grande (...) hay que reestructurar muchas cosas”, dice el exdirector de Enami Patricio Céspedes.

Para Jorge Riesco, presidente de la Sonami, la nueva administración tiene el desafío de consolidar la sostenibilidad financiera sin perder el rol de aportar al desarrollo minero del país. “Eso implica avanzar con decisión en eficiencia operativa, revisar proyectos estructurales y fortalecer su gobernanza. Al mismo tiempo, es fundamental que Enami mantenga reglas claras y estables para sus productores, porque miles de pequeños mineros dependen de su capacidad de compra y procesamiento”, señala.

El analista de Mercado e Industria sénior de Plusmining, Juan Cristóbal Ciudad, sitúa el origen de la mejora en dos “decisiones extraordinarias”: la suspensión de la fundición Hernán Videla Lira en febrero de 2024 y la venta a Codelco de la participación del 10% que



El Gobierno designó a Juan Carlos Sáez fue designado nuevo vicepresidente ejecutivo.

Enami mantenía en Quebrada Blanca. “Ese giro respondió, sobre todo, a decisiones extraordinarias de caja y a un esfuerzo por estabilizar la operación, más que a una transformación estructural ya consolidada”, indica. La empresa está en un mejor pie financiero que antes. El indicador de endeudamiento de Enami se sitúa en 2, indica Álvaro Merino, director ejecutivo de Núcleo Minero, una mejora desde el 8,9 que tenía antes de la venta de su participación en Quebrada Blanca, el año 2023. Pero en el sector privado, compañías como Escondida, Collahuasi y Pelambres registran una relación en torno a 1. La estatal tiene pasivos por US\$ 724 millones, de los cuales US\$ 345 millones son de corto plazo y US\$ 379 millones de largo plazo.

Para que la mejora se vuelva

sostenible, Ciudad sostiene que la nueva administración deberá pasar de la “recuperación contable a la disciplina operativa”, lo que implica seguir reduciendo inventarios inmovilizados para liberar liquidez, contener costos y reforzar la generación de caja del negocio recurrente. En la misma línea, Merino apunta que la estatal debe optimizar el proceso de venta de más de 400 mil toneladas de minerales que mantiene en stock. “Ello naturalmente irá en directo beneficio de su posición financiera y generará recursos para su modernización, particularmente de sus plantas que tienen muchos años de antigüedad”, afirma.

A fines del año pasado, Enami recibió la aprobación ambiental de su proyecto de modernización de la fundición Hernán Videla Lira —más conocida como Paipote—, que contempla una inversión de US\$ 1.700 millones. El segundo megaproyecto es el *joint venture* con Río Tinto para ingresar al negocio del litio a través de Salares Altoandinos. A diferencia del acuerdo de Codelco con SQM, esta iniciativa parte desde cero, sin infraestructura de extracción preexistente. “El principal cuello de botella es que el Estado le exige a Enami mucho más que su mandato tradicional de fomento. Hoy la empresa no solo debe sostener su rol con la pequeña y mediana minería, sino también empujar proyectos de gran escala, alto ries-

go y capital, como Salares Altoandinos y la nueva fundición de Paipote”, comenta Ciudad. “El problema es evidente pues esas apuestas estratégicas avanzan mientras la estabilización operacional de la compañía todavía sigue en proceso”, asegura.

Para Ciudad, el desafío en la fundición no se limita solo al financiamiento. “En fundiciones, también importa garantizar abastecimiento, utilización suficiente, estructura comercial competitiva y una operación capaz de sostenerse en un entorno regulatorio y ambiental más exigente. Sin eso, el proyecto puede ser técnicamente moderno, pero financieramente frágil”, advierte.

Merino agrega que la nueva administración deberá decidir con claridad si continuará con el proyecto por US\$ 1.700 millones, ya que involucra la búsqueda de financiamiento.

Ciudad advierte que la asociación con Río Tinto reduce parte del riesgo técnico y financiero, pero no elimina los nudos del proyecto: quedan aprobaciones regulatorias pendientes, persisten tensiones en torno a concesiones asociadas a Eramet en el área de influencia, y Enami deberá “construir capacidades internas para supervisar un negocio completamente distinto al suyo”. “El Mercurio” consultó al Ministerio de Minería, que preside Enami, pero no respondió